

RELATORÍA JURÍDICA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Miércoles 01 de Julio de 2015

Suspenden decreto que limita a entes territoriales para declarar zonas excluidas de minería

El magistrado del Consejo de Estado, Guillermo Vargas Ayala, consideró que a través de la norma se desconoce el principio de autonomía territorial, lo que lo llevó a suspender provisionalmente el Decreto 2691 del 2014.

En su criterio, lo allí establecido da lugar a que los entes territoriales queden supeditados por completo a lo que establezca el Ministerio de Minas y Energía respecto a las disposiciones tendientes a la protección de los entornos naturales que puedan verse perjudicadas por el desarrollo de actividades extractivas en las áreas de su jurisdicción.

A su entender, el decreto es contrario al mandato impartido por la Corte Constitucional para que el marco institucional de protección del medio ambiente fuese el resultado del consenso entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional.

Recordó que fue esa la condición que estableció la Corte Constitucional para considerar exequible el artículo 37 del Código de Minas (Ley 685 del 2001), que impide a municipios, distritos y departamentos excluir áreas del desarrollo de este tipo de actividades

(C. P. Guillermo Vargas Ayala). (Consejo de Estado Sección Primera, Auto 11001032400020150016300, 6/25/2015) Noticia generada en Jun. 30/15 (4:54 p.m.)

Pagos anticipados: exigencia de justificar y motivar su inclusión

El estatuto de contratación no contempla la exigencia específica de justificar la condición contractual de pago anticipado, permitiendo la ley el pacto contractual respectivo hasta por el porcentaje legalmente establecido. Así las cosas, para el Consejo de Estado la exigencia de justificar y motivar el pago anticipado corresponde necesariamente a un asunto sometidos a la reserva de ley.

Conforme a la anterior, el Consejo de Estado declaró la nulidad del primer inciso del numeral 6º de la Directiva Presidencial No. 12 expedida el 1º de octubre de 2002, así como la nulidad del primer inciso del numeral 6º de la Directiva Presidencial No. 04 expedida el 4 de abril de 2003, que establecía: "Salvo casos excepcionales plenamente justificados y motivados, las entidades no pactarán pagos anticipados.

Esta restricción no se aplicará al Sector de la Defensa Nacional".

Lunes 6 de Julio de 2015

En el Valle, no procedió comisión de éxito de contrato en prestación de servicios al existir una condición

El Departamento del Valle del Cauca no debía pagar prima de éxito a contratista: Consejo de Estado.

"La estipulación de la comisión de éxito por virtud del principio de conmutatividad exige que se pacte por el Estado y los contratistas con base en referentes objetivos que se aproximen a un real equilibrio económico, sin sujetarse solamente a supuestos convencionales, bajo las siguientes reglas fundadas en el principio de conmutatividad: (1) (...)se debe establecer en los estudios previos la metodología y la escala de límites razonables para determinar la cuantía de la misma con el objeto de responder al principio de conmutatividad; (...) (5) en los contratos de prestación de servicios sólo se reconocerá la comisión de éxito siempre que efectivamente se logre beneficio(s) o éxito objetivamente identificado en los estudios previos, para el patrimonio público o el interés general; (6) en ningún caso podrá percibirse comisión de éxito por la simple ejecución del contrato cuando no se ha logrado o verificado efectivamente el beneficio o provecho para el patrimonio público".

Por lo tanto, La Corporación consideró improcedente la impugnación realizada por el demandante, quien alegaba que pese a cumplir con lo pactado en un contrato de prestación de servicios, el Departamento del Valle del Cauca no había cancelado el valor correspondiente a la prima de éxito por ejecución del mismo, tesis que no fue acogida Sala ya que "no obra ningún medio probatorio que permita con certeza, suficiencia y verosimilitud determinar que la recuperación, o los ahorros mensuales a favor del Departamento del Valle del Cauca se hayan probado, (...)no era dable exigir dicha prestación ya que al existir la condición, y al no haberse producido el acontecimiento a la que se ligada la misma, la

entidad demandada quedó liberada de cualquier vínculo (...) ya que para el momento de la liquidación efectuada por la entidad demandada no podía exigirse pago alguno por concepto de una comisión de éxito existiendo una condición que al no haber probado su cumplimiento no podía desprender como consecuencia su pago al no haber surgido aún el derecho”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N35268 (01754-01) Contractual 2015/05/06 Magistrado Ponente, Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Análisis de la regulación en los pliegos de condiciones de la figura del empate de ofertas y del acto de adjudicación

La Sala entró a analizar la legalidad de la condición demandada del pliego de condiciones (la figura del empate entre ofertas que tienen determinado puntaje) y el acto de adjudicación del contrato, con el ánimo de establecer si, como lo pide el actor, son nulos.

Dijo que “si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que estas cláusulas adolecen de ilegalidad porque desconocen el principio de selección objetiva, y porque se apartan de los principio de imparcialidad e igualdad que debe orientar a la contratación estatal – regla general de estudio que ahora conserva la Sala-, en el presente caso, y sólo en el presente –una variación exige un examen puntual del mismo-, la figura no desconoce que la elección del proponente debe realizarse con base en el aludido principio, al contemplar una sub regla de desempate que le impide a la administración escoger discrecionalmente al proponente”.

“Lo anterior significa que el análisis de validez realizado hasta ahora aplica al caso concreto de la condición o cláusula prevista en el pliego de condiciones de esta licitación, otro supuesto exige un análisis propio, de manera que no toda cláusula de empate queda gobernada por una aplicación extensiva de este argumento de la providencia, siendo necesario juzgar una por una cada formula de empate que cree la administración, pues se insiste, la mayor parte de las veces la Corporación las ha encontrado ilegales”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N31821 (01058-01) Nulidad-Restab 2015/05/13

La cláusula excepcional de caducidad en los contratos estatales

La potestad para declarar la caducidad administrativa de los contratos del Estado, se encuentra limitada a los eventos de incumplimiento del contratista, siempre que no sea la entidad demandada la que haya puesto al contratista en situación de incumplimiento y cuando se trate de garantizar la satisfacción del interés general comprometido por la no realización o ejecución tardía o indebida del objeto contractual.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado analizando el tema de la cuantificación del perjuicio que provoca la inhabilidad derivada de la caducidad administrativa declarada nula, cuando no hay certeza sobre su monto o cuantía.

En todo caso, es pertinente indicar que el Alto Tribunal de lo Contencioso manifestó que la entidad puede abstenerse de declarar la caducidad, mediante la adopción de medidas de control e intervención que garanticen la ejecución del objeto contratado, pues, no puede pasarse por alto que una vez celebrado el contrato la ejecución del objeto contractual es la finalidad que debe ser atendida primordialmente por las partes contratantes.

En relación con el debido proceso, se indicó que el mismo se ejerce mediante la presentación de pruebas, la controversia de las existentes, ser oído y que se practiquen pruebas y se controviertan, es decir, en síntesis, que se respete su derecho de audiencia y defensa, que permita fijar la posición de la parte, y en general, toda forma de participación en el procedimiento, que contribuya a defender una posición o postura jurídica.

Finalmente, en la providencia se reitera que el término dentro del cual la administración puede declarar la caducidad de un contrato estatal es aquél establecido como el plazo de ejecución contractual, pues, mal podría pretenderse terminar por la vía de la caducidad lo que ya se terminó por la vía de extinción del plazo.

Sentencia 35766_2015 Consejo de Estado

Cada empleo público pertenece a la entidad en general y no a cada dependencia en particular

“En este orden de ideas, cuando una entidad tiene planta global, cada empleo de la entidad pertenece ella en general y no a cada dependencia en particular siendo competencia del jefe del organismo distribuir los cargos y ubicar cuantas veces crea necesario el personal de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre y cuando no implique condiciones menos favorables para el empleado”.

DAFP-Concepto-2015-N0062681 2015/04/16

Servidores públicos no pueden celebrar contratos con la misma entidad con la que se encuentren vinculados

“En consecuencia, esta Dirección considera que un servidor público no puede celebrar contratos con la misma entidad estatal en la que se encuentra vinculado, ni con personas privadas que manejen o administren recursos públicos por sí o por interpuesta persona, ni percibir honorarios profesionales derivados de dicha vinculación contractual, así el objeto de la contratación no se encuentre relacionado con sus funciones”.

DAFP-Concepto-2015-N0062791 2015/04/16

No es viable que un contratista tenga asignadas funciones de carácter permanente

“Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de absolver la inquietud formulada en su consulta, se precisa que no sería viable que un contratista (particular) tuviera asignadas funciones de carácter permanente, como la de expedir constancias o certificaciones y elevar derechos de petición o consultas a nombre de la entidad, salvo que dichas actividades estén expresamente contempladas en el contrato de prestación de servicios y estén directamente relacionadas con la ejecución del objeto contractual”.

DAFP-Concepto-2015-N0063111 2015/04/17

Plan de austeridad solo aplica a entidades de la rama ejecutiva del orden nacional: Directiva Presidencial 06 de 2014

“Considerando lo anterior, en criterio de esta Dirección Jurídica las disposiciones contenidas en la Directiva Presidencial No. 6 de diciembre de 2014, son aplicables a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Así las cosas, esta Dirección Jurídica considera que la Directiva Presidencial no estableció dentro de su ámbito de competencia a las entidades del orden territorial”.

DAFP-Concepto-2015-N0061171 2015/04/14

Viernes 10 de Julio de 2015

Administración podía permitir goce de propiedad privada en Farallones de Cali, de manera restrictiva

El Consejo de Estado explicó que si bien la constitución de áreas forestales no impone una prohibición al goce de la propiedad privada sí establece una restricción, para que el acceso a ella solo se produzca desde la perspectiva del mantenimiento y uso racional de esos terrenos.

Así, si bien el artículo 63 de la Constitución define los parques naturales como imprescriptibles, inembargables e inalienables, pueden coexistir en sus áreas la propiedad pública y la privada, esta última ligada a un régimen especial, en donde el titular no puede enajenar sus derechos y debe sujetarse a las necesidades del entorno natural en el que se encuentra la propiedad.

Bajo esos presupuestos, la Sala juzgó adecuada la exclusión de unas 1.050 hectáreas de la reserva forestal ubicada en los Farallones de Cali (Valle) decretada por el Ministerio de Medio Ambiente en 1998, pues su propósito era la construcción de vivienda de interés social; en cuanto a la omisión de la misma cartera para inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la Resolución 92 de 1968, que declaró como parque natural las 15.000 hectáreas y 2.000 metros cuadrados de la reserva, la Sala consideró que se violaron derechos colectivos a la protección de áreas con importancia ecológica.

Esa inscripción, dice, evita la comercialización de los terrenos, dada la prohibición de venta del artículo 13 de la Ley 2ª de 1959 (C. P. María Claudia Rojas).

Noticia generada en Jul. 10/15 (12:09 p.m.) (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 76001233100020040065601, 6/26/2015)

Función Pública recuerda que este domingo 12 de julio vence plazo para publicar informe pormenorizado de control interno

El informe corresponde al periodo del 12 de marzo al 12 de julio del 2015 y debe ser publicado en el sitio web de cada entidad.

Entonces, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) informó a los jefes de control interno que este domingo 12 de julio vence el plazo para publicar el informe pormenorizado del estado del control interno.

Para la publicación, las entidades deben tener en cuenta la actualización realizada al modelo estándar de control interno (MECI), basado en dos módulos: planeación y gestión, y evaluación y seguimiento. Así mismo, deben validar el eje transversal de información y comunicación y el componente de rendición de cuentas, así como lo que se está mostrando de la gestión institucional al público.

De acuerdo con el artículo 9º de la Ley 1474 del 2011, el incumplimiento de esta disposición legal puede ser considerada “falta disciplinaria grave”, agregó el DAFP.

Así mismo, estos informes “tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten”, añade la ley.

(Departamento Administrativo de la Función Pública, Comunicado, 7/7/2015) Noticia generada en Jul. 7/15 (8:00 a.m.)

Nulidad absoluta del contrato estatal- Conductas contrarias a los principios de la contratación.

En el caso que se subestime el valor de contrato estatal para luego adicionarlo en su valor sin justificación alguna, se desconocen los principios que inspiran la contratación estatal e imponen al juez contrato la obligación de declarar su nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado analizando entre otros los siguientes temas: (i) Principios que orientan la contratación pública, (ii) Conductas contrarias a los principios de la contratación, (iii) las causales de nulidad absoluta contenidas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, y (iv) el principio de la reformatio in pejus frente a la declaratoria de nulidad absoluta.

Consejo de Estado Sección Tercera 29201

Por cuantía se determinará la competencia de los juzgados y tribunales administrativos

Cuando se pretende atacar la nulidad de actos particulares que imponen sanción, la competencia en razón de la cuantía se determina según la regla general contenida en el numeral 3º de los artículos 152 y 155 del CPACA, es decir que si la cuantía es inferior a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes serán los jueces administrativos los que deben conocer del asunto en primera instancia.

Pero si es superior serán los tribunales administrativos los que asuman el conocimiento. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia no tenía competencia funcional para avocar el conocimiento del proceso por la cuantía discutida. Esa falta de competencia es insaneable, por lo que deberá declararse la nulidad de todo lo actuado por esa Corporación. Declara. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Documento disponible al público en junio de 2015. Temas: Competencia. Sanciones. Cuantía. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Expediente 05001 23 33 000 2013 00760 01 (20961) de 2015

Conozca las novedades de la ley de participación ciudadana

Luego de su trámite en el Congreso y del control previo en la Corte Constitucional, el Gobierno publicó el texto de la ley estatutaria que regula la promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1757 del 2015, quedan establecidos los nuevos lineamientos con los que se garantizan las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, así como también se garantiza el derecho a controlar el poder político.

De esta manera, el articulado ingresa al ordenamiento jurídico con novedosas reglas que pretenden cumplir el objetivo de mejorar y agilizar la participación democrática. En efecto, dentro de los cambios más importantes se destaca la eliminación de requisitos que hacían perder agilidad al proceso ciudadano.

En el artículo 5º, por ejemplo, quedó contemplada la eliminación de las firmas para algunos mecanismos. A partir de ahora, un solo ciudadano podrá ser vocero y promotor de referendos y revocatorias de mandato, y ya no será necesaria la recolección de firmas para constituir el comité promotor.

Las consultas populares, por su parte, serán de origen ciudadano tanto en el orden nacional como el territorial y contarán con el apoyo del 5 % y 10 % del censo electoral, respectivamente. De acuerdo con el artículo 31, en el primer evento, el Presidente de la República podrá consultarle al pueblo una decisión de trascendencia nacional, mientras que en el segundo podrán hacerlo los gobernadores y alcaldes.

Ahora bien, los cambios realizados sobre la revocatoria del mandato, son, hasta ahora, los más controvertidos.

No solo se disminuyeron los porcentajes requeridos para convocar los comicios de revocatoria (del 40% al 30% del total de votos que obtuvo el mandatario elegido) y los porcentajes de participación en dichas elecciones (del 50% al 40% de la votación válida registrada el día en que se eligió al mandatario).

Además, se estableció su promoción siempre y cuando hayan pasado 12 meses desde la posesión del gobernante y no falte un año para que

termine su respectivo periodo, tal y como fue condicionado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 del 2015.

(Congreso de la República, Ley 1757, jul. 6/2015)

Esta es la sentencia que validó la reforma estatutaria a mecanismos de participación ciudadana

Una de las precisiones de la Corte Constitucional es que ningún mandatario que se encuentre en su último año de ejercicio puede ser revocado (artículo 6º). Además, aclaró que la prohibición de alusiones personales y publicitarias en formularios de recolección de apoyos ciudadanos a iniciativas electorales debe regir también procesos de revocatoria (literal b) parcial del artículo 8º).

A su turno, declaró inexecutable que la voluntad del comité promotor sea suficiente para archivar una iniciativa de referendo que ya ha recibido el respaldo suficiente para convertirse en ley (parágrafo 2º, parcial, del artículo 19). También se condicionó el plebiscito a que no pueda tramitarse para promover leyes aprobatorias de tratados internacionales, de presupuesto, ni las referentes a materias fiscales o tributarias.

La Sala Plena subrayó que la asamblea constituyente no es omnímoda, en tanto está condicionada por la voluntad expresada en la consulta popular constituyente por la cual sea elegida (literales a) y c) del artículo 20). Por otro lado, concluyó que facultar al Presidente de la República para suspender votaciones de mecanismos de participación sin que alguno de los estados de conmoción haya sido declarado afectaría el orden democrático, por lo que excluyó la posibilidad de que el mandatario pueda imponer esta medida cautelar por un simple “ambiente de intimidación para los votantes” (artículo 40 parcial).

(Corte Constitucional, Sentencia C-150 (PE-038), 4/8/2015)

Contratos realidad no incluyen a los contratistas en las convenciones colectivas de la entidad contratante

El Consejo de Estado determinó que el contrato realidad no puede convertir a quien lo celebra en empleado público o trabajador oficial. Dado que el nexo del contratista con la entidad contratante se produce bajo la modalidad de prestación de servicios, el primero no puede ser

cobijado por la convención colectiva de la entidad que lo contrata, precisó.

En el caso concreto, la labor del especialista ginecobstetra como contratista de la ESE demandada no era esporádica sino permanente y dada bajo la subordinación de su contratante. Su sujeción a horarios y turnos previamente establecidos para cumplir la programación establecida para la atención en urgencias, observación, consultas y cirugías denotaban la existencia del contrato realidad, sentenció.

En estos casos, anotó, no procede la prescripción extintiva trienal del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, dado que las obligaciones solo se hacen exigibles desde el reconocimiento judicial del vínculo laboral (C. P. Sandra Lisset Ibarra).

(Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 68001233100020090063601 (12302014), 5/13/2015) Noticia generada en Jul. 7/15 (9:15 a.m.)

Precisan causación y exigibilidad de compensación del impuesto predial

La Ley 56 de 1981 estableció el pago de una compensación del impuesto predial a cargo de las entidades propietarias de obras construidas para generación y transmisión de energía eléctrica, acueductos, riego y regulación de ríos y caudales, a favor de los municipios afectados por las mismas, como una forma de resarcir el tributo que estos dejan de percibir con respecto a dichos predios.

En ese sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró que aunque no exista un acuerdo municipal que incorpore esa compensación, esto no le impide surtir efectos a nivel territorial. Esto significa que la compensación puede aplicarse directamente en cada municipio (acudiendo al régimen tributario general), pues no se necesita una regulación especial adicional, explicó la sentencia.

Por otra parte, el alto tribunal precisó que dicha obligación se causa el 31 de diciembre de cada año y es exigible cuando la administración la liquida mediante acto administrativo ejecutoriado, siempre y cuando ella esté causada y el municipio la determine e inicie el proceso de cobro dentro del término de prescripción.

Así las cosas, el plazo para pagar la compensación depende de su determinación mediante el acto pertinente, que una vez ejecutoriado da paso a su exigibilidad, concluyó la corporación (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000233700020120028201 (21113), 6/25/2015) Noticia generada en Jul. 7/15 (9:28 a.m.)

Entidad pública debe brindar estabilidad laboral a mujer contratista en estado de embarazo

“De conformidad con las normas y la jurisprudencia citada, atendiendo a la estabilidad reforzada de que gozan las mujeres en estado de embarazo, en desarrollo del artículo 43 de la constitución política, la entidad pública que obra como contratante de la mujer en el estado anotado debe propender por otorgar estabilidad laboral por el tiempo de gestación y tres meses posteriores al parto, con el fin de que la trabajadora cuente con la protección necesaria de la cual pueda derivar el estado de bienestar para ella y su hijo, dando de esta forma cumplimiento a la garantía fundamental”.

DAFP-Concepto-2015-N0065191 2015/04/21

Abogado que coadyuva a injuriar y calumniar a un colega incurre en falta disciplinaria

Cuando un abogado firma, en calidad de coadyuvante, la revocación de un poder a otro profesional del Derecho utilizando términos desobligantes e injuriosos materializa una falta disciplinaria en la que vulnera el bien jurídico descrito en el numeral 7º del artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 del 2007).

Así lo afirmó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo que confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses a un abogado que colaboró con su compañera permanente para desplazarlo del encargo encomendado y, en los documentos y peticiones suscritos para ello, incluyeron manifestaciones injuriosas.

De acuerdo con el pronunciamiento, la defensa sostenía que la actuación del investigado no había sido en calidad de profesional del Derecho y, por tanto, no podían serle impuestas las sanciones aplicables a los abogados.

Pese a ello, en criterio del alto tribunal, que se decidiera utilizar el término coadyuvar y, además, firmar utilizando su tarjeta profesional lleva a concluir que lo hizo como profesional del Derecho, así su interés hubiese sido apoyar a su compañera permanente, pues con su comportamiento estableció una relación jurídica dentro del escrito, calificando su actuación como asistencia, apoyo o ayuda. Por eso, resultó irrelevante si en el disciplinable se conjugaron las calidades de compañero permanente y coadyuvante, pues la una no desvirtúa la otra.

En el momento en el cual suscribió el documento, con el propósito de ser tenido como interviniente, imprimiendo su firma, con apoyo de su tarjeta profesional, desplegó una conducta propia de un abogado, actuó como tal y, en tal consideración, es destinatario del Estatuto Disciplinario erigido para controlar a los profesionales del Derecho, sentenció la corporación (M. P. Wilson Ruiz).

Noticia generada en Jul. 10/15 (10:58 a.m.) (Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 11001110200020090594202, 3/11/2015)

Martes 14 de Julio de 2015

Incumplimiento de fallo de tutela no es suficiente para imponer sanción por desacato

La Corte Constitucional recordó que el solo incumplimiento del fallo de tutela no da lugar a la imposición de la sanción por desacato, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia.

De ese modo, aseguró, para sancionar por desacato en materia de tutela resulta indispensable que el juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el ánimo de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si, por el contrario, ha obrado de buena fe.

En ese sentido, aclaró, no es dable presumir la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento, pues en este tipo de procesos se deben seguir los principios del derecho sancionador (M.P. Jorge Iván Palacio).

(Corte Constitucional, Sentencia T-271, 5/12/2015) Noticia generada en Jul. 13/15 (3:11 p.m.)

Recuerdan cómo atribuir responsabilidad a la administración por riesgo excepcional

La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que para que pueda atribuirse responsabilidad a la administración bajo el título objetivo de riesgo excepcional es necesario que se materialice un riesgo al que haya expuesto a sus funcionarios, empleados, contratistas o particulares, según el caso, con ocasión del desarrollo de actividades peligrosas, tales como el uso de armas de fuego, la conducción de vehículos automotores o la conducción de energía eléctrica.

En el caso analizado, se acreditó que la alcaldesa del municipio demandado le encargó a un electricista la realización de unas instalaciones eléctricas en el alumbrado público, hecho que condujo a la recepción de una descarga eléctrica sobre el demandante, hecho que implicó la materialización del riesgo al que la entidad estatal demandada lo expuso

(C.P. Carlos Alberto Zambrano). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 73001233100020060181501 (34927), 5/27/2015) Noticia generada en Jul. 13/15 (8:27 a.m.)

Así va el Código de Policía en el Congreso

La amplia reforma al Código de Policía contiene nuevas regulaciones sobre comportamiento y convivencia ciudadana y continuará su trámite a partir del próximo 20 de julio.

La propuesta, que pasa a segundo debate en la plenaria del Senado, desarrolla aspectos relacionados con el poder, función y actividad de la Policía Nacional.

Entre algunos de los aspectos más polémicos se destacan el artículo que establece que la Policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados previamente; el ingreso de esta fuerza a inmuebles sin que medie orden judicial en casos de emergencia y la potestad que los uniformados tendrían para movilizar a los ciudadanos que se opongan cuando estén alcoholizados o bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, entre otros.

La medida prohíbe el uso de armas no letales que usan algunos ciudadanos para su defensa, como gas pimienta y pistolas de balines. Quienes porten tales elementos podrían incurrir en multas de 1 a 4 salarios mínimos mensuales.

También, se precisa que quienes no paguen las multas serían reportados a centrales de riesgo. La propuesta establece sanciones más severas contra quienes maltraten a los animales y crea una contravención especial para el acoso y los actos sexuales abusivos en el transporte público. (Senado de la República, Texto definitivo P. L. 145/15S, 6/16/2015)

Noticia generada en Jul. 13/15 (1:41 p.m.)

Consejo de Estado aclara presupuestos para interrumpir prescripción de la acción disciplinaria

Retomando la unificación de jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación, la Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que para la interrupción no basta con la expedición del acto principal sino que, además, es necesaria la notificación del mismo, para que surta plenos efectos jurídicos.

La sentencia, publicada recientemente, aclaró que los cinco años de prescripción de la acción disciplinaria comenzarán, para las faltas instantáneas, desde el día de la consumación, y desde la realización del último acto en las de carácter permanente o continuado, interrumpiéndose con la notificación legal al disciplinado de la providencia que defina la situación jurídica.

La importancia de esta distinción, explicó, radica en la determinación de la fecha de referencia necesaria para empezar a contabilizar la prescripción de la acción (C.P. Luis Rafael Vergara). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 050012331000200404182 01 (041012), 11/27/2014) Noticia generada en Jul. 13/15 (1:34 p.m.)

Controversias en los contratos del Estado - Jurisdicción competente cuando se rigen por el derecho privado

La Corte Constitucional en sentencia de unificación de jurisprudencia, se pronunció en relación con el tema de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y, el de la caducidad de la acción en materia

de controversias en los contratos del Estado que se rigen en lo sustancial por el derecho privado.

Es preciso indicar que en la mencionada providencia se advierte que la Ley 1107 de 2006, no modificó aspectos relacionados con términos de caducidad o de prescripción, sino que sólo se limitó a regular aspectos de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Corte Constitucional SU 24215

Demostrar ilegalidad no es suficiente para lograr nulidad del acto de adjudicación

El Consejo de Estado sentenció que el demandante debe, además, demostrar que su propuesta era mejor que la del adjudicatario. Esto en aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que impone a las partes demostrar el supuesto de hecho de las disposiciones que dieran lugar al efecto jurídico que persiguen.

Además, indicó que el acto por medio del cual se le informa al oferente que ha sido escogido un participante distinto de aquél no es susceptible de ser demandado, porque no constituye un acto que, expresando la voluntad de la administración, cree una situación jurídica

(C. P. Carlos Alberto Zambrano). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 54001233100019971323501 (30157), 6/24/2015) Noticia generada en Jul. 13/15 (8:23 a.m.)

Principio de la selección objetiva - los actos contractuales siempre deben estar motivados

Todos los actos administrativos que emitan las Entidades del Estado con ocasión de la actividad contractual, salvo aquellos de mero trámite, deben ser debidamente motivados.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado precisando que los informes de evaluación emitidos por un comité asesor o consultor, aun cuando no comporten ninguna obligatoriedad para el funcionario facultado para adjudicar el contrato, ni un derecho a exigir la contratación para el ofertante calificado con mayor puntaje, "deben basarse en los criterios o parámetros previamente definidos por la

administración como las bases de la licitación”, esto es, deben ser motivados.

De otra parte, en la providencia se destaca que el informe de evaluación de las propuestas no es obligatorio para el jefe o representante legal de la entidad a quien le compete realizar la adjudicación, ya que éste puede apartarse del mismo en aras de resguardar el principio de la selección objetiva, dado que la elección de la oferta más ventajosa finalmente debe ser efectuada por el órgano competente.

En efecto, en la Sentencia se reiteró que: “No obstante que es con el informe de evaluación de las propuestas que la administración da a conocer a los proponentes la calificación que asignó a cada una de las ofertas, de acuerdo con los diferentes factores que fueron objeto de la evaluación, dicho informe no decide la adjudicación ni le confiere al proponente calificado con el mayor puntaje el derecho a exigirla, en tanto, como ya se indicó, los informes de evaluación los elabora un comité asesor o consultor, a quien la ley prohíbe trasladar la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección, ya que ésta sólo la tiene el jefe o representante de la entidad estatal (art. 26 ord. 5º ley 80 de 1993). Además, esa calificación se puede corregir o modificar cuando la administración encuentre pertinentes y ajustadas a las reglas de la licitación las observaciones realizadas por los oferentes”.

En este orden de ideas, se menciona que el principio de la selección objetiva en la contratación estatal se ha erigido como pilar fundamental en los procesos de selección, y precisamente dicho principio, hace alusión a que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella persigue, como resultado de ponderar los factores o criterios de calificación que se establezcan en los pliegos de condiciones o sus equivalentes; advirtiendo que la actividad de evaluación es actuación reglada en la cual las recomendaciones del comité deben basarse en los criterios o parámetros previamente definidos por la administración en los Pliegos de Condiciones.

Ver texto de la Sentencia.

Mentir bajo la gravedad de juramento ejerciendo el derecho a la defensa no puede tener consecuencias penales

La Corte Suprema de Justicia advirtió que imputar falso testimonio a quien en ejercicio de su defensa miente es tanto como desconocer el

principio de no autoincriminación del artículo 33 de la Constitución. Recordó cómo la Corte Constitucional, al juzgar la exequibilidad del artículo 394 de la Ley 906 del 2004, estableció que la posibilidad de que el propio enjuiciado declare en el proceso que se adelanta en su contra, bajo la gravedad de juramento, impone que su dicho alrededor de su propia conducta no tenga consecuencias penales adversas para él (Sentencia C-782 de 2005).

Indicó que la misma consideración debe tenerse en cuenta para procesos anteriores a la vigencia de la Ley 906 del 2004, como los propios de las leyes 522 de 1999 y 600 del 2000; añadió que aun cuando en estos últimos no se prevé la posibilidad de que el acusado declare bajo juramento en el juicio, tampoco prohíbe que declare antes de iniciada esa fase, de donde se desprende que, tratándose del acusado como testigo o del testimonio de quien posteriormente es acusado, en ningún caso puede haber consecuencias penales para el declarante

(M. P. Gustavo Enrique Malo). (Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-8032 (39703), 6/24/2015) Noticia generada en Jul. 13/15 (8:00 a.m.)

El contrato de la maquina "tapahuecos" se hizo pasar por uno de ciencia y tecnología para evitar el proceso de licitación

Por irregularidades en la contratación de la máquina "tapahuecos", destinada para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a las señoras María Gilma Gómez Sánchez, en su condición de directora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá; y María Constanza Aguja Zamora, en su condición de secretaria general de esa unidad.

Al determinar que se trataba de un contrato de obra pública y no uno de ciencia y tecnología, y el cual legalmente da lugar a una contratación directa, por lo tanto exigía un proceso de licitación pública el cual permite seleccionar de varias aspirantes y de manera objetiva al ejecutor de la obra.

En consecuencia la conducta de las investigadas se realizó con el fin de evadir el proceso de selección objetiva del contratista, y el de agotar el presupuesto de la unidad finalizando la vigencia fiscal 2013.

Estudiantes que realicen prácticas en entidades públicas o privadas deben contar con ARL

“Esto implica que los estudiantes, independientemente del régimen de salud al que pertenezcan o de que su práctica sea ad honorem o remunerada, deben contar con todas las prestaciones económicas y asistenciales en caso de sufrir un accidente o enfermedad laboral que ocurra en el desarrollo de su práctica o actividad laboral”.

ContraloríaGR-Concepto-2015-N0040172 2015/04/30

Conozca los equipos de trabajo de la Dirección Jurídica

El Director Jurídico de la Alcaldía de Santiago de Cali, Carlos Humberto Sánchez Llanos, emitió la Resolución 4121.0.21.0056 de 13 de Julio de 2015 “por medio de la cual se asignan los servidores públicos en los procedimientos de la subdirección técnica, los equipos de trabajo internos de la Dirección Jurídica y se dictan otras disposiciones”.

La Subdirección Técnica, a cargo del abogado César Hugo Henao Correa, liderará los subprocesos de Soporte y Asesoría Jurídica y de Defensa de lo Público.

La Resolución asigna a los servidores públicos responsables de los procedimientos a cargo de la Subdirección Técnica, conforme a sus responsabilidades y en el marco de la implementación del Modelo de Gerencia Jurídica Pública.

Ver Resolución Adjunta

Jueves 16 de Julio de 2015

Accidente de tránsito ocasionado por omitir señalización configura falla del servicio

Las señales de tránsito, en general, indican la forma correcta como deben circular los usuarios de calles y carreteras, indicando las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan

el tramo de circulación y las informaciones necesarias de acuerdo a las condiciones específicas de la vía, recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por consiguiente, cuando la Administración omite su implementación y ello es la causa determinante de un accidente de tránsito, se configura una falla en el servicio, capaz de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, advirtió el alto tribunal

(C.P. Hernán Andrade Rincón) (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 50001233100019994018401 (33493), 5/27/2015)Noticia generada en Jul. 16/15 (9:42 a.m.)

Suspendida norma: límite de 65 años opera para servidores públicos, no para particulares que prestan servicio público

Decretan suspensión provisional del numeral 2 del artículo 83 y del numeral 7 del artículo 102 del Decreto 1469 de 2010 por cuanto el Presidente de la República excedió la facultad reglamentaria al establecer como requisito no tener más de 65 años para concursar y ser designado como curador urbano.

Se solicitó la nulidad del numeral 7 del artículo 93 del Decreto N° 564 de 2006 y el numeral 2° del artículo 83 del Decreto N° 1469 de 2010, proferidos por el Presidente de la República y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en adelante el Gobierno, por medio de los cuales se estableció como falta absoluta de los curadores urbanos el cumplimiento de la edad de retiro forzoso y como requisito para concursar y ser designado curador urbano no tener más de sesenta y cinco (65) años de edad. Para la Sala, “de acuerdo con los artículos 123 y 210 de la Constitución Política corresponde a la ley la determinación del régimen de los particulares que cumplen funciones públicas, en desarrollo de esa potestad el legislador mediante el artículo 9° de la Ley 810 de 2003 señaló que el curador urbano es un particular que cumple funciones públicas regulando diversos aspectos, sin establecer para ellos una edad de retiro ni el requisito de no tener más de sesenta y cinco (65) años para concursar y ser designado en esa función pública”.

Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2015-N02905-14 (00942-00) Nulidad-Simple 2015/04/06

Procurador solicita inexequibilidad de norma que permite libre nombramiento y remoción de jefes de control interno

Según el concepto emitido por el Ministerio Público, el aparte contenido en el artículo 5° de la Ley 909 del 2004 vulnera la regla general de provisión de cargos por el sistema de carrera administrativa, que establece la Constitución.

En su criterio, las funciones que desempeñan los jefes de tales dependencias no se pueden apartar del sistema de méritos; entre las razones expuestas para solicitar la inconstitucionalidad, advirtió que este tipo de cargos requiere un conocimiento de derecho disciplinario específico, el cual se garantizaría con el concurso.

De otro lado, destacó que el sistema de méritos permitiría que el funcionario, en principio, esté desligado de cualquier atadura respecto de quien lo nombró en el cargo, a efectos de la imparcialidad que debe revestir en sus investigaciones; por último, aseguró que el grado de confianza cualificada, que avala este tipo de nombramientos, no se presenta para el caso de los jefes de control interno, pues la investigación sobre la comisión de una determinada falta disciplinaria no requiere de un alto grado de confianza sino, por el contrario, de un operador objetivo e imparcial que analice con detenimiento los expedientes y casos a su cargo.

(Procuraduría General de la Nación, Comunicado 719, 7/15/2015)
Noticia generada en Jul. 16/15 (9:52 a.m.)

Reiteran que asuntos tributarios no son conciliables

Los casos en donde se discuten temas de naturaleza tributaria no son susceptibles de conciliación. Por tanto, si se pretende debatir asuntos de ese tipo, se debe acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, sin necesidad de agotar previamente la conciliación, ya que esta no es un requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, recordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Frente al caso estudiado, la corporación indicó que se debía analizar la aplicación de la condición especial de pago, prevista en la Ley 1175 del 2007, en consecuencia, no era viable exigir la conciliación extrajudicial (C. P. Carmen Teresa Ortiz).

(Consejo de Estado Sección Cuarta, Auto 25000232400020120010101 (19711), 6/11/2015)

Reiteran que quien tenga interés en demandar al Estado debe allegar constancia de solicitud de conciliación prejudicial

La Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que, a partir de la expedición de la Ley 1285 del 2009, para interponer las demandas de reparación directa, contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho se debe allegar constancia que acredite el inicio del trámite de la conciliación extrajudicial, pues, de no ser así, la demanda no podrá admitirse. La corporación recordó lo dicho por la Corte Constitucional, en el estudio de la norma, en donde se señaló que este mecanismo previo es un medio adecuado y conducente para garantizar el acceso a la justicia, pues ofrece un espacio para dar una solución a los conflictos por la vía de la autocomposición y “permite que asuntos que normalmente no llegan a la justicia estatal formal, porque las partes los consideran dispendiosos, difíciles o demasiado onerosos en términos de tiempo y esfuerzos, puedan ser ventilados y resueltos rápidamente y a un bajo costo”.

Finalmente, aclaró que lo que se exige no es la celebración de un acuerdo, sino el intento de conciliación como paso previo y necesario para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa (C.P. Guillermo Vargas Ayala). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232400020100002401, 5/21/2015)

Ejecución de actividades sin contrato- Procedencia excepcional para su reconocimiento y pago

Todo particular que pretenda suscribir o realizar actividades en favor de una entidad del Estado, debe respetar las normas de orden público consagradas por el ordenamiento jurídico, y que tanto aquél como las entidades contratantes deben velar por el cumplimiento de los preceptos jurídicos.

Conforme lo anterior, sólo en casos excepcionales es procedente el reconocimiento y pago de bienes o servicios que se hubieren recibido por parte de las entidades públicas sin que medie la existencia de un contrato que conste por escrito.

En efecto, el Consejo de Estado reiteró que de manera excepcional y por razones de interés público o general, resulta procedente la actio de in rem verso, para entre otras las siguientes situaciones:

"a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993".

Es preciso indicar que en la providencia se indicó que el reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto para restablecer lo causado.

Sentencia 27194-2015 Consejo de Estado Sección Tercera

La jurisdicción contenciosa administrativa debe conocer los procesos donde actúen entidades públicas y empleados públicos

Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de la misma ciudad por el conocimiento de la demanda ordinaria laboral incoada contra la secretaría de Educación Departamental del Atlántico, entregando el conocimiento a la jurisdicción administrativa, al encontrarse que el actor fue vinculado a la entidad por lo cual se aviene como propia, la actividad que desempeñó en dicha entidad de empleado público, correspondiendo por ende a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Lo anterior, en razón de la naturaleza de la entidad pública para la cual laboró el demandante, y al no encontrarse la actividad desplegada por éste, "CONSERJE" dentro de las excepciones previstas en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, donde se consideran como trabajadores oficiales a aquellos que desarrollan actividades de la construcción y sostenimiento de las obras públicas.

Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón Gómez. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Administrativa.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria Expediente 11001 01 02 000 2014 02918 00 (10123 22) de 2015
2015-03-04

La cosa juzgada puede ser declarada de oficio, incluso en segunda instancia

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Sala Laboral, la cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo inicio del proceso a través de las llamadas excepciones previas o bien puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia.

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia en un pronunciamiento reciente, luego de explicar que el artículo 282 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), aplicable a los procesos del trabajo por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concede al juzgador dicha posibilidad, salvo las

consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas.

En ese sentido, resaltó que al ser la cosa juzgada un interés de orden público, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, incluso de oficio (M.P. Jorge Mauricio Burgos). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-6097 (64253), 5/20/2015)

No en todas las demandas con interés privado ante lo contencioso se tiene que condenar en costas al perdedor

El operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales, y condenará cuando aparezca acreditada probatoriamente su causación.

En este caso se decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad C.I. Cititex De Colombia S.A. -hoy Cititex Uap S.A.- contra la sentencia proferida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y condenó en costas a dicha sociedad, argumentando que resultaba procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 en donde se dispone que dicha condena procede en todos los procesos contencioso administrativos, salvo en aquellos en los que se ventile un interés público.

“El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) dispuso en materia de costas lo siguiente: “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”

Si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en

costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales”.

Consejo de Estado CE-SEC1-EXP2015-N00446-01 Nulidad-Restab
2015/04/16

Corrigen yerros en Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional

“Artículo 1°. Corrijase el yerro contenido en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014. Artículo 5° de la Ley 1712 2014 quedará así: "Artículo 5°. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control (...).”.

DAPRE-Decreto-2015-N0001494 2015/07/13 Diario Oficial-N049572
2015/07/13

Boletín 168 del Consejo de Estado

Cada sentencia o auto está resumido con varios enfoques para que usted gane en rapidez y comprensión de las decisiones jurídicas del Consejo de Estado.

El Boletín completo del Consejo de Estado, en esta oportunidad el número 168 correspondiente al 07 de Julio de 2015. Es un resumen emitido por el propio Consejo de Estado de sus principales decisiones.

En este Boletín 168 encontrará 3 tutelas; 2 Acciones de Cumplimiento; 3 de la Sección Primera; 2 de la Sección Segunda; 6 de la Tercera; 5 de la Cuarta; 2 de la Quinta; 1 de la Sala Plena, y, 1 de la Sala de Consulta.

Consejo de Estado CE-SP-EXP2015-N00168 Boletín 2015/07/07

Carmelo Darío Perdomo Cuéter, nuevo magistrado del Consejo de Estado

La Sala Plenísima lo eligió este miércoles como nuevo integrante de la Sección Segunda, para que ocupe la plaza que dejó vacante Bertha Lucía Ramírez. El nuevo magistrado es abogado de la Universidad Católica, con especialización en derecho constitucional y derecho público de la Universidad Nacional y tiene una maestría en derecho administrativo de la Universidad Externado.

Fue magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá y Casanare, procurador delegado, asesor del despacho del Procurador General y jefe de la división política de ese organismo. Actualmente, es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También ha sido docente de derecho administrativo y derecho constitucional en la Universidad Autónoma, de la Gran Colombia y de la católica. (Consejo de Estado Noticias, Comunicado, 7/15/2015)

Martes 21 de julio de 2014

Improcedente imputar responsabilidad a la administración cuando el daño es ocasionado por un tercero

Confirmada providencia que negó las pretensiones del actor dirigidas a que se declarara administrativamente responsable al Municipio de Cúcuta por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones sufridas por su familiar menor de edad con ocasión de un accidente de tránsito, al determinar que el demandante no logró acreditar que el daño fue el resultado mismo de una conducta contraria a los deberes legales de la administración y, no darse por satisfecho con un juicio meramente hipotético, como lo hizo, porque ello implica un desbordamiento propio de la teoría de la equivalencia de las condiciones.

De conformidad con lo anterior, el daño que aquí se reclama fue causado por un tercero, y no está demostrado que su conducta fue facilitada por una acción u omisión del Municipio de Cúcuta.

Así las cosas, se configura una ausencia de imputación, toda vez que el daño no es atribuible a conducta alguna de la administración pública, esto es, no le es referible al Estado, toda vez que el hecho del tercero constituye una ausencia de imputación.

Confirmó. M.P. Hernán Andrade Rincón. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Responsabilidad del Estado. Transporte. Accidente de Tránsito. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera- Expediente 54001 23 31 000 1996 09346 01 (31716) de 2015- 2015-06-24

Los términos de caducidad no son plazos que el legislador estableció de manera caprichosa para restringir el acceso a la administración de justicia

Los términos de caducidad se fijaron por razones de fondo, relacionadas, principalmente, con la seguridad jurídica y con la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la propia administración.

En cuanto a la seguridad jurídica, porque debe existir siempre un momento definitivo para que se consoliden los actos administrativos que han creado, extinguido o modificado las situaciones jurídicas de carácter particular.

Y, en cuanto a la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la propia administración, porque los actos administrativos que definen situaciones, reconocen o niegan derechos a los particulares no pueden cuestionarse indefinidamente en sede administrativa o jurisdiccional. Confirma. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

Documento disponible al público en junio de 2015. Temas: Términos. Derechos. Razones. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Expediente 17001 23 31 000 2012 00236 01 (20923) de 2015 - 2015-05-28

Una vez vencido el plazo para ejecutar los cobros no se podrá hacer efectivo el recaudo de los mismos

Teniendo en cuenta que en principio el plazo para pagar venció en el 2002 de acuerdo con la Resolución 157 de 1998, la Administración podía iniciar coactivamente el cobro a más tardar en el 2007, por lo que el 3 de mayo de 2012 fecha en que fueron notificados los mandamientos de pago, ya había vencido el término legal para iniciar la acción de cobro.

Por lo anterior, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora tuvo vocación de prosperidad. Razón por la cual, la Sala se relevó del

estudio de los demás cargos; en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará levantar el embargo, por concepto de valorización, registrado en los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles de propiedad de los demandantes, con ocasión de los mandamientos de pago.

Revoca. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Documento disponible al público en junio de 2015. Temas: Revocatoria. Cobros. Vocación. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Expediente 54001 23 33 000 2012 00030 01 (21080) de 2015 - 2015-06-25

Contratos de tracto sucesivo, cómo diferenciarlos de los contratos de ejecución instantánea

La esencia de los contratos de tracto sucesivo no está necesariamente en que su cumplimiento se prolongue en el tiempo, sino en la pluralidad de prestaciones que se deben cumplir y la independencia entre ellas; pues, cuando la única prestación debe cumplirse por partes o instalamentos no quiere decir que estemos hablando de un contrato de tracto sucesivo, sino de un contrato único, instantáneo pero pactado a plazos, como por ejemplo cuando se contrata la elaboración de una obra. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en reciente providencia.

De otra parte, en la misma providencia se pronunciaron en relación con la competencia de la administración para declarar el siniestro de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista, señalado que una de las prerrogativas con las que cuenta la administración en desarrollo de la actividad contractual es la de declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral debidamente motivado, potestad que no se deriva del artículo 14 de la ley 80 de 1993 sino de lo previsto Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que puede ejercer durante la vigencia de la respectiva póliza que se trate.

En el caso a tratar, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de unas Resoluciones por medio de las cuáles se declaró la terminación unilateral del contrato argumentando el hecho de haberse pretermitido el proceso de selección objetiva, invocando para tal fin la causal 2 del artículo 44 de la ley 80 de 1993, siendo que en el proceso, la causal que se evidenció fue la contemplada en el numeral 3

del mismo artículo, esto es, por haberse celebrado con desviación o abuso del poder.

Finalmente, se reiteró que existe la posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad, si está plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes que celebraron el contrato nulo.

Consejo de Estado Sección Tercera: 39122-2015

Demostración de la responsabilidad del Estado por bienes inmuebles objeto de ocupación permanente

Para declarar la responsabilidad por ocupación permanente el demandante debió dejar plenamente probado que hay identidad entre los inmuebles objeto de la demanda y aquellos en los que fue ejecutada la obra pública, no meras conjeturas.

Es decir, que se logró acreditar que la faja de terreno en la cual se ejecutó la obra pública se encuentra comprendida dentro de las medidas y linderos establecidas en las escrituras públicas registradas en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios y en los planos de Catastro Municipal de los predios objeto de la demanda.

No es suficiente con los testimonios recepcionados en este proceso, en los que se precisó que hubo una ocupación en los inmuebles de los demandantes, pues no se estableció de manera concreta que materialmente fueron ocupados, pues se debió señalar de manera precisa que el área de construcción de la obra tuvo lugar en los terrenos señalados en el proceso.

Razón por la cual, al ser el daño antijurídico el primer elemento de la responsabilidad que debe ser acreditado en el proceso y ante la falta de demostración de su existencia, falencia que se deriva de la no acreditación de la ocupación permanente alegada, se negarán las pretensiones de la demanda.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCION C Actor: SOCIEDAD MERCANTIL
MERCOVIL S.A. Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ (E) Bogotá,
D.C, seis (6) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número:
05001-23-31-000-1997-02667-01(30892)

Habiéndose demostrado la existencia de un vínculo laboral debe hacerse la cancelación de las prestaciones sociales

El proveído impugnado debió ser modificado en el sentido de indicar que la parte accionada deberá pagarle al demandante lo que le corresponda por concepto de prestaciones sociales tomando como base para la liquidación lo que devengaba un médico ginecólogo de planta; sufragar los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensiones pero sólo en la cuota parte que le corresponde a la Entidad, y siempre que el demandante acredite haberlas pagado, descontando en todo caso del valor de la condena los 42 días de interrupción de la relación contractual, sin que haya lugar a la devolución de los descuentos efectuados por retención en la fuente.

Pues, para la Sala queda claro que si el contrato realidad tiende a equiparar al Docente contratista con el Docente de Planta, es apenas lógico que si este último devenga sus prestaciones sociales durante todo el año sin solución de continuidad, igual derecho tiene la actora quien quedó cesante durante las interrupciones contractuales.

Confirma. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Documento disponible al público en junio de 2015. Temas: Contrato Realidad. Vínculo Laboral. Prestaciones Sociales.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Expediente 68001 23 31 000 2009 00636 01 (1230 2014) de 2015- 2015-05-13

Firmeza de la notificación a través de correo electrónico para efectos de impuestos distritales

Queda claro que la práctica de la notificación por correo supone exclusivamente dos condiciones, una subjetiva relacionada con el destinatario del correo, y otra objetiva, referida al lugar de destino del mismo:

- La efectiva entrega de la copia del acto a notificar a su destinatario
- La realización de dicha entrega en la última dirección informada por el contribuyente.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA
ALIANZA FIDUCIARIA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO INVERTIP
contra EL DISTRITO CAPITAL - Consejera Ponente: CARMEN TERESA

Si se aceptara que envío por correo debe entregarse personalmente, notificación por correo y personal serían idénticas

Según la demandante, Invercheques y Cía. Ltda., "el envío por correo debió ser entregado personalmente al representante legal de la sociedad actora". La Sala consideró que este argumento no puede prosperar. Indicó que "el artículo 565 del Estatuto Tributario contempla varias formas de notificación. Una de estas es la notificación personal y otra es la notificación mediante el envío de copia de la providencia o actuación respectiva, por correo. Si se aceptara la tesis planteada en la demanda, de que el envío por correo debe ser entregado personalmente al contribuyente, se llegaría a la conclusión de que la notificación por correo y la personal son idénticas".

Como se puede apreciar, "la tesis expuesta en la demanda conduce a conclusiones contrarias al espíritu de las normas que regulan el tema de las notificaciones y que, de aceptarse, fácilmente producirían un grado de dificultad extrema en el trámite de las actuaciones administrativas".

Para la Corporación, "la interpretación de las normas que regulan las notificaciones debe consultar la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes pero sin hacer imposible el trámite de la actuación".

Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N19858 (00786-01) Nulidad-Restab 2015/05/07

Viernes 24 de julio de 2015

Hecho superado: durante el trámite de tutela se reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

Revocada decisión que concedió el amparo de los derechos fundamentales del accionante para en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatarse que durante el trámite de la acción de tutela, cesó la conducta que dio origen al presente amparo constitucional y que fundamentó la pretensión invocada por la agente oficiosa.

En efecto, como se infiere del acto administrativo enviado a esta Corporación por parte de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, dado que se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por lo tanto, al desaparecer las causas que motivaron la interposición de la presente acción, en criterio de este Tribunal, no sólo carece de objeto examinar si los derechos invocados por la accionante fueron vulnerados, sino también proferir órdenes de protección, pues no se trata de un asunto que plantee la necesidad de formular observaciones especiales sobre la materia.

Revocó. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Tutela. Laboral. Indemnización Sustitutiva de Pensión.

Corte Constitucional Sentencia T 376 de 2015 - 2015-06-23

Anulado aparte de Acuerdo de Cali que en 1998 fijó en mil pesos la expedición de la factura de cobro del impuesto predial

El Consejo de Estado se pronunció sobre la procedencia de la acción de simple nulidad contra una norma derogada.

Dentro del proceso está demostrado que el Acuerdo Cali 031 de 1998 fue derogado por el Acuerdo Cali 321 de 2011. El Consejo de Estado, antes de acceder a la declaratoria de nulidad del inciso 1 del artículo 13 del Acuerdo Cali 031 de 1998, a través del cual se dictaron normas sobre el impuesto predial unificado, analizó la procedencia de la acción de nulidad contra actos generales derogados, la definición de tasa y el cobro de papelería por facturación del impuesto predial.

El citado inciso 1 aquí anulado, decía: "ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La factura de cobro del Impuesto Predial Unificado tendrá un costo de mil pesos (\$1.000), que se incluirá en el monto a pagar con la misma. El valor será reajustado anualmente por el Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería".

Frente al inciso 2 del citado artículo acusado, que a la letra dice: "Autorízase al Señor Alcalde para hacer los créditos y contracréditos (sic) presupuestales necesarios en el presupuesto de 1999, para asumir los costos de impresión de las facturas de cobro a que se refiere este Acuerdo", la Sala no analizó su legalidad "ya que en la demanda no se formularon cargos en su contra". Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N21116 (00470-01) Nulidad-Simple 2015/05/28

Ministerio de Cultura no debe pagar servicios que le prestó particular sin tener fundamento en un contrato escrito

“Para que el acuerdo de voluntades nazca a la vida jurídica es preciso que obre en escrito y por ello no es posible probar el contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal”.

“Las relaciones contractuales del Estado deben constar por escrito, habida cuenta de que éste constituye requisito o formalidad constitutiva (ad substantiam actus y ad solemnitatem), conforme a lo dispuesto por los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. De ahí que para que el acuerdo de voluntades nazca a la vida jurídica es preciso que obre en escrito y por ello no es posible probar el contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal, tal y como lo ha indicado una y otra vez la jurisprudencia de la Sala”.

Por lo tanto, La Corporación consideró procedente la impugnación realizada por el demandado, quien alegaba que no debía pagar nada a Radar Creativo Ltda. por los supuestos servicios que este le había prestado, tesis que acogió la Sala ya que “la causa del enriquecimiento y del correlativo empobrecimiento estuvo radicada en cabeza del propio particular, quien asumió voluntariamente, y sin que mediara contrato estatal, prestar el servicio de memoria visual para el Segundo Encuentro Colombia CREA”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N27873 (00389-01) Contractual 2015/04/09

Es menester indicar que es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en forma óptima y eficiente, esto contribuye a la consecución de los fines esenciales del estado

Con la declaratoria de insubsistencia de la actora no se configuró la desviación de poder por desmejora en el servicio, que obedeciera a la arbitrariedad intencional de la Administración con fines personales, para favorecer a terceros o con influencia de una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, en abuso de sus poderes para fines diferentes de aquellos que le fueron conferidos por la ley.

Por tal motivo, en el sub lite el acto de remoción acusado fue simplemente el resultado del ejercicio de las facultades que ostentaba el

nominador, por lo que al no haberse logrado desvirtuar su legalidad, la Sala confirmará la sentencia del a quo por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Confirma. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Pretensiones. Desviación. Cumplimiento.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Expediente 05001 23 31 000 2002 00382 01 (0193 12) de 2015- 2015-02-11

Verificación y especial cuidado de los hechos por parte de medios de comunicación de investigaciones adelantadas por órganos del estado

Valorar hechos es legítimo así como cuestionar decisiones o pronunciamiento judiciales, por cuanto ninguna autoridad pública es intocable ni perfecta; pero no lo es distribuir contenido falso o presentar opiniones deliberadamente insultantes que defrauden el derecho de la comunidad a recibir información veraz e imparcial.

Las actuaciones que se encuentran en investigación por los órganos del Estado merecen un especial cuidado por parte de los medios de comunicación, los cuales deben realizar una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse de sustituir a las autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal.

Lo anterior no obsta para que los medios divulguen los datos disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo correspondiente, e incluso, una vez publicado este, continúen reprochando una determinada conducta desde otras esferas de control social.

Corte Constitucional - Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015). Sentencia T-312

Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a cumplimiento de Plan Jarillón del río Cauca (Cali-Valle del Cauca)

“La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento al proyecto que desarrollan los gobiernos de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca para reubicar a las familias que se encuentran

asentadas en el jarillón del río Cauca. Los organismos competentes han dado cuenta del proceso de recuperación de la zona y de las obras adelantadas por la CVC y EMCALI EICE ESP, las cuales no han avanzado por cuanto al encontrarse ocupados los terrenos no se han podido ejecutar en su totalidad los proyectos de adecuación y reforzamiento del jarillón, lo cual podría poner en riesgo a la ciudad de Cali ante una eventual inundación”.

Procuraduría-Comunicado-2015-N0000725 2015/07/21

Contraloría fija pautas que se deben tener en cuenta para verificar para que se cumpla Ley de Garantías

La Contraloría General de la República (CGR) expidió la Circular Externa 011, donde señala una serie de recomendaciones sobre la gestión fiscal y las prohibiciones vigentes en época preelectoral, con la finalidad de que los recursos y la ejecución presupuestal de las entidades públicas no se utilicen para favorecer causas políticas.

De acuerdo con la circular, la CGR ejercerá especial vigilancia sobre los recursos públicos que involucran el desarrollo de las jornadas electorales, para que sean destinados a los fines determinados.

El ente de control fiscal recordó a los sujetos vigilados las prohibiciones que establece la Ley 996 del 2005, entre otras, presionar a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política; favorecer con promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política y ofrecer algún tipo de beneficio para los ciudadanos o para las comunidades mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

Recordó igualmente las prohibiciones vigentes, para gobernadores y alcaldes sobre celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones.

(Contraloría General de la República, Circular externa 011, 7/15/2015)
Noticia generada en Jul. 23/15 (3:26 p.m.)

Consejo asesor de control interno imparte orientaciones sobre función preventiva a entidades

El Consejo asesor de control interno, el cual es presidido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió la Circular 01 del 2015, mediante la cual imparte orientaciones a las oficinas de control interno de las entidades del orden nacional y territorial acerca de su función preventiva, a partir de la declaratoria de inexequibilidad del numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 del 2000, que facultaba a la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer dicha función.

Según la Circular, el representante legal de la organización deberá tomar acciones para el fortalecimiento del control interno de su entidad, con el propósito de evitar la materialización de los riesgos asociados a la pérdida o indebida destinación de los recursos públicos.

El consejo instó a estas dependencias a fortalecer el ejercicio del control de los bienes públicos, asignar servidores competentes para el cumplimiento de las funciones de estas áreas, reportar los hallazgos y generar advertencias y continuar con el ejercicio de acciones correctivas para cumplir con las advertencias formuladas por la CGR antes de la comunicación de la Sentencia C-103 del 2015, la cual determinó que este tipo de intervención en la función administrativa suponía la violación de la prohibición de coadministración que impuso la Constitución de 1991 al organismo de control fiscal.

La circular fue remitida a representantes legales, jefes de oficinas de control interno, o quienes hagan sus veces, de las entidades que hagan parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993. (Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular 01, 7/9/2015)

Noticia generada en Jul. 23/15 (9:53 a.m.)

Municipios responsables de obras de valorización están llamados a regular el recaudo y el área beneficiaria

Así lo sostuvo el Consejo de Estado al advertir que el artículo 2º del Decreto 1604 de 1996 le permite a la entidad departamental o municipal que adelante las obras ejecutar la distribución y recaudo de la contribución, para que los ingresos las financien u otras de interés público que se proyecten.

El ente territorial, por tanto, puede distribuir el gravamen, fijar sus zonas de influencia, determinar si las obras son de beneficio general o

local y determinar la extensión de ese beneficio en áreas rurales o urbanas.

Con base en el análisis de estas atribuciones legales, la Sala determinó que el municipio de Tocancipá (Cundinamarca) sí incluyó dentro del área de influencia de la contribución el lugar donde el actor habitaba y ejercía su actividad económica, en ejercicio de facultades legales, como se evidencia en los artículos 11 del Acuerdo 5 del 2009 y 13 del Acuerdo 14 del mismo año.

También admitió el poder vinculante de la memoria técnica establecida para cada obra financiada con los dineros del recaudo (artículo 45 del Acuerdo 5 del 2009) (C. P. Carmen Teresa Ortiz). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020110013801 (20064), 4/23/2015) Noticia generada en Jul. 22/15 (9:42 a.m.)

Restricción de la Ley de Garantías no se extiende a la prórroga, modificación, adición o cesión de contratos o convenios

Teniendo en cuenta que la restricción prevista en el párrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías Electorales) se refiere a celebrar contratos o convenios, sin hacer mención a la prórroga, modificación, adición o cesión de los mismos, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Circular 105 del pasado 15 de julio, precisó que estas operaciones están permitidas durante el periodo electoral, siempre que los contratos o convenios se hayan celebrado antes del periodo de restricción y se cumplan, además, los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.

De otra parte señaló que si bien la contratación por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se clasifica en la modalidad de contratación directa, la restricción en materia contractual está dirigida única y exclusivamente a convenios y contratos interadministrativos que ejecuten recursos públicos, sin que se extienda a la contratación mencionada, contenida en el literal c) del artículo 2º de la Ley 1150 del 2007, por lo que no está prohibida dicha causal de contratación directa durante el periodo preelectoral y, en consecuencia, podrá adelantarse bajo los parámetros legales aplicables a cada caso.

(Secretaría General Alcaldía Bogotá, Circular 105, 7/15/2015) Noticia generada en Jul. 22/15 (10:20 a.m.)

Cláusulas excepcionales no pueden pactarse o ejercerse sin sustento legal

Con fundamento en la autonomía de la voluntad, en los contratos estatales no puede pactarse o ejercerse cláusulas excepcionales, como lo es por ejemplo la cláusula de caducidad, la cual puede incluirse en un contrato sólo cuando la ley lo autoriza.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, mencionando que el ordenamiento jurídico se encuentra conformado por distintos tipos de normas jurídicas, entre estas; las imperativas, y las dispositivas. Las primeras, son normas de orden público por lo que su cumplimiento es obligatorio, limitando el ejercicio de la autonomía privada de las partes, pues cualquier estipulación en contra de una norma imperativa deviene en nula; las segundas por el contrario, no son de obligatorio cumplimiento por lo que las partes pueden apartarse libremente de estas, y en caso de no hacerlo colmarán los vacíos dejados por las partes.

En el caso, se concluyó que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 prohíbe la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales en los contratos de seguros, siendo esta una norma imperativa, no era posible jurídicamente – ni en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes – pactar dichas cláusulas, por ser cláusulas prohibidas y por tanto viciadas de nulidad absoluta.

Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia 27269-2015

Responsabilidad por daño causado con vehículo particular cuya guarda tiene una entidad pública

Como lo ha precisado la Sala, “si con un vehículo oficial -o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda-, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó”.

No obstante, el demandado podrá exonerarse de responsabilidad patrimonial mediante la demostración de una causa extraña, esto es fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, lo cual ocurrió en este caso, como pasa a explicarse a continuación.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A Demandante: Astrid Acosta Bocanegra y otros.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.
Consejero Ponente (E): HERNÁN ANDRADE RINCÓN Bogotá, D.C., doce
(12) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación:
760012331000199901944 01 Interno: 27344

Por solo tres días Arauca perdió demanda contractual de encargo fiduciario por caducidad de la acción

En demanda contra el Consorcio Fiduagraria, el Departamento de Arauca dejó operar el fenómeno de la caducidad.

La Sala consideró improcedente la impugnación realizada por el demandante, quien alegaba que su acción de controversias contractuales contra el Consorcio Fiduagraria S.A. no se encontraba caducada, tesis que no acogió la Sala ya que de acuerdo al término de caducidad de las acciones citado en el literal c) del artículo 136 del CCA “Como los dos años empezaron a correr el 25 de junio de 1999, fecha en la que, -como quedó demostrado- se liquidó el contrato de encargo fiduciario, la parte demandante tenía plazo para instaurar la demanda hasta el 25 de junio de 1999, sin embargo, ese día era festivo, de allí que, debía presentarla al día hábil siguiente, esto es, 26 de junio, pero como lo hizo el 29 de ese mes y año, conforme lo demuestra el sello de radicación de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca que obra a folio 30 vto. del cuaderno 1, no hay dudas que se presentó fuera de término”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N31013 (01489-01) Contractual
2015/04/09

Jueves 30 de julio de 2015

Deber de indemnizar daño por saneamiento de bienes que se destinarán a utilidad pública no puede excluir al Estado

La posibilidad de que el Estado quede eximido de la acción indemnizatoria derivada de adquisición de bienes necesarios para fines de utilidad pública o interés social vulneraría el derecho a la propiedad privada.

Así lo concluyó la Corte Constitucional como argumento para declarar inexecutable la expresión “diferentes a la entidad pública adquirente”, contenida en los artículos 245 de la Ley 1450 del 2011, 21 de la Ley 1682 del 2013 y 156 de la Ley 1753 del 2015; ello implica que también ante la duda respecto a la titularidad del bien objeto de la expropiación los daños que se generen en el saneamiento de la propiedad no pueden eximir al Estado del deber de reparar.

Ello, dice, porque solo el pago de un resarcimiento justo por la pérdida del derecho de dominio que conservaba el titular podrá dar lugar a que el traspaso sea considerado como acorde a los principios de la Constitución.

La prohibición para el ejercicio de esta acción reparadora de daños, en caso de generarse responsabilidad del Estado por irregularidades que ocurran en el proceso de adquisición, configura una “privación anticipada del derecho al acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo”, concluyó la Sala, que recordó que en estos casos se activa el deber consagrado en el artículo 90 de la Constitución (M. P. Alberto Rojas). (Corte Constitucional, Sentencia C-410 (D-10494), 7/1/2015) Noticia generada en Jul. 28/15 (8:30 a.m.)

Falta de infraestructura puede causar falla en la prestación del servicio de bomberos

La prevención y control de incendios y otras calamidades conexas atendidas por las instituciones bomberiles es un servicio público a cargo de los municipios, quienes pueden prestarlo a través de los cuerpos de bomberos oficiales o la celebración de contratos con voluntarios, señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Entonces, existe falla del servicio cuando la entidad territorial no adopta las medidas necesarias para garantizar la prestación de aquel ni cuenta con la infraestructura requerida.

No obstante, el alto tribunal aclaró que el municipio también debe reaccionar adecuada y efectivamente en el momento requerido, es decir, es indispensable que esté preparado para afrontar cualquier estado de emergencia o peligro (C. P. Olga Mélida Valle). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000232600020030156501 (32414), 1/28/2015) Noticia generada en Jul. 28/15 (1:52 p.m.)

Instituciones educativas deben formular planes alternativos para quienes no deseen participar en prácticas religiosas (11:58 a.m.)
(Mineducación, Concepto 23650, 3/13/2015)

Falla en el servicio: la falta de señalización y de marcas divisorias del carril fueron causales de un accidente de tránsito

Declarado administrativamente responsables el Municipio de Acacias por los perjuicios ocasionados al demandante como consecuencia de las lesiones que le produjo el accidente de tránsito acaecido en el año de 1996, en la carretera que de Acacías conduce a la vereda Dinamarca, al determinar que la responsabilidad se deduce de la omisión consistente en la falta de señalización de curva peligrosa y a la falta de las marcas viales, constituyendo de este modo una evidente falla del servicio, siempre y cuando los conductores de las motocicletas tenían el deber de conservar su carril, lo cierto es que ese hecho se dificultó por la inexistencia de las líneas de demarcación que permitía identificar el límite de circulación para cada lado de la vía.

Declaró. M.P. Hernán Andrade Rincón. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Falla en el Servicio. Tránsito. Responsabilidad. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera- Expediente 50001 23 31 000 1999 40184 01 (33493) de 2015

Efectos vinculantes del precedente horizontal y el precedente vertical

Es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia.

En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado– no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.

En desarrollo de los derechos a la libertad de conciencia y libertad de cultos, los estudiantes no están obligados a participar en actividades que contravengan sus creencias

En este sentido, las instituciones educativas deben formular planes alternativos de formación para aquellos miembros de la comunidad educativa que manifiesten su intención de no participar en este tipo de prácticas, indicó el Ministerio de Educación.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 4500 del 2006, por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media, las instituciones educativas deben contar con un plan alternativo para los estudiantes que opten por no tomar la cátedra ofrecida, caso en el cual se deberá decidir en el proyecto educativo institucional (PEI), según las condiciones del entorno cultural y social, los programas a desarrollar con aquellos alumnos que hacen uso de su legítimo derecho a no recibirla.

La consulta que resolvió la entidad se refería a la obligación de los estudiantes y docentes de participar en los carnavales de Barranquilla, por considerarlos contrarios a sus credos de fe. Noticia generada en Jul. 28/15 (11:58 a.m.)

Reiteran cuál es el hecho generador del impuesto de alumbrado público

La Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró que el hecho generador del impuesto de alumbrado público es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo.

Según el alto tribunal, es el supuesto de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago de un tributo.

De acuerdo con el pronunciamiento, la doctrina ha precisado que el hecho generador está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El primero de ellos, indicó,

corresponde al hecho en sí mismo considerado, mientras que el elemento subjetivo a la conexidad de ese hecho con un sujeto, en la medida en que lo ejecuta o realiza.

En ese contexto, indicó que dentro del elemento objetivo también se ha considerado que es posible diferenciar un aspecto material o cualitativo que hace alusión al propio hecho que el legislador previó como generador del impuesto; un aspecto espacial que tiene que ver con la jurisdicción territorial en donde se realiza el hecho; el aspecto temporal que tiene que ver con el momento en que nace la obligación, más conocido como causación, y el aspecto cuantitativo que permite medir “la magnitud cuantitativa del hecho generador”

(C.P. Hugo Fernando Bastidas) (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020110026701 (20569), 7/16/2015)
Noticia generada en Jul. 28/15 (9:32 a.m.)

Responsabilidad fiscal en la actividad precontractual del Estado

No se eximen de responsabilidad fiscal los servidores del Estado que participan en las etapas previas para la suscripción del Contrato, por el hecho de argumentar que no fueron quienes finalmente suscribieron el respectivo contrato.

En efecto, el Consejo de Estado indicó que si bien es cierto la responsabilidad fiscal en el tema contractual radica, en principio, en el ordenador del gasto, igualmente lo es que no se puede pasar por alto la responsabilidad de las distintas dependencias y funcionarios que tuvieron participación en las etapas previas a la suscripción del contrato.

En este sentido, precisaron que para llevar a buen término la contratación pública, se deben agotar las distintas etapas y por ende, dar estricto cumplimiento a las funciones que le corresponde desarrollar a cada una de las dependencias que tienen que ver con el tema, como aporte para lograr el cometido final. Sentencia Consejo de Estado. 42501-15

Multas en los contratos estatales - Competencia de las entidades estatales - tesis jurisprudenciales

Sí las multas lo que se busca es constreñir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones parcialmente incumplidas en ejecución

del contrato, no tendría sentido alguno que las partes acordaran su imposición cuando el término de ejecución del contrato ha vencido, o ante incumplimiento total y definitivo del objeto contractual.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, analizando el tema de la competencia de las entidades estatales para imponer y hacer exigibles las multas en vigencia de la Ley 80 de 1993, realizándose una reseña sobre las tesis jurisprudenciales sobre el tema.
Sentencia Consejo de Estado 38797-15

Viernes 31 de julio de 2015

Recuerdan características mínimas de avalúos efectuados en procesos de expropiación administrativa

La Sección Primera del Consejo de Estado recordó que los avalúos efectuados en un proceso de expropiación administrativa deben contener unas características mínimas en orden a garantizar el cabal desarrollo de los principios de publicidad, transparencia y contradicción, lo cual ocurre cuando el afectado conoce claramente todos los criterios y estudios de comparación con base en los cuales se fijó el precio de adquisición del inmueble.

En efecto, indicó que no basta simplemente con anunciar en el avalúo cuál fue el método empleado en su elaboración o con señalar que en su diseño se dio estricta aplicación a las disposiciones de la Ley 388 de 1997, del Decreto 1420 de 1998 y de la Resolución 762 del mismo año, pues las comparaciones efectuadas deben ser explicadas y dadas a conocer al propietario del inmueble cuyo traspaso forzoso se pretende, quien, además, tiene el derecho de saber cuáles fueron los criterios y parámetros de comparación que se tuvieron en cuenta y cuáles las operaciones que se realizaron para determinar el monto de la respectiva indemnización expropiatoria

(C.P. María Claudia Rojas). Noticia generada en Jul. 31/15 (9:43 a.m.)
(Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232400020070003001, 07/31/2015)

Los contratos celebrados de manera simultánea durante 20 años, son prueba de un contrato realidad

La Corte Constitucional procedió a amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la estabilidad laboral reforzada, y otros de la accionada, y en consecuencia ordenar a Colpensiones reintegrarla en un cargo equivalente al de la relación contractual que venía desarrollando, o a uno de superior jerarquía, lo anterior con base en que los múltiples contratos de prestación de servicios suscritos durante cerca de veinte años entre la actora y el ISS, lo que desprende una prueba fehaciente de que, en lugar de tener una relación limitada en el tiempo, era una relación laboral a término indefinido con obligaciones claramente estipuladas, por esto, es claro que el requisito de la temporalidad tampoco se cumplió.

Seguido a esto, la accionada no tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la tutelante para terminar su contrato, quien es madre cabeza de hogar, tiene a su cargo la subsistencia económica de su núcleo familiar compuesto por su hijo en situación de discapacidad y su madre de 77 años de edad.

Revocó. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Documento disponible al público en julio de 2015. Temas: Laboral. Tutela. Contrato Realidad. Corte Constitucional- Sentencia T 345 de 2015 2015-06-05

Competencias de comisiones legislativas para ejercer control político a alcaldes tienen restricciones

La Corte Constitucional aclaró que aun cuando estas instancias pueden ejercer sobre tales funcionarios el mismo tipo de control que mantienen sobre el Gobierno nacional, en virtud del artículo 137 de la Constitución, esta facultad está restringida al cumplimiento de varios requisitos.

Así las cosas, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes puede citar a un alcalde a un debate de control político, por ser este integrante de la Rama Ejecutiva, pero solo si se trata de un requerimiento de la comisión y no de uno o varios de sus integrantes y además si lo hace en ejercicio de alguna de las indagaciones que se encuentre a su cargo, siempre que la temática tenga relación con asuntos que le atañen a la Nación, en tanto temas exclusivamente locales son de competencia del concejo respectivo.

Adicionalmente, la célula que cita debe insistir en la convocatoria, una vez presentada la excusa por parte del respectivo burgomaestre. La Sala comprobó así que la Comisión Primera de la Cámara no expuso cuál era el objeto del debate al que citó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; tampoco dio cuenta del interés nacional del asunto a tratar, ni expuso la aprobación de una proposición en la que insistiera en su convocatoria, una vez el funcionario se excusó de asistir a la citación; de ahí que considerara fundada la excusa del mandatario local para no atender el llamado.

El magistrado Luis Guillermo Guerrero salvó el voto, por considerar que el Congreso sí había acumulado los requisitos para poder llevar a cabo el debate de control político contra Petro, concluyendo así que su excusa no se encontraba fundada (M. P. Jorge Iván Palacio). (Corte Constitucional, Comunicado, 07/31/2015) Noticia generada en Jul. 31/15 (8:29 a.m.)

Defensoría radica proyecto de reforma a la tutela

La Defensoría del Pueblo radicó en la Cámara de Representantes un proyecto que pretende reformar la acción de tutela, para optimizar su transparencia y garantizar un efectivo control social sobre el comportamiento de los jueces.

En particular, se concentra en el proceso de selección y revisión adelantado por la Corte Constitucional. Así, se definirían criterios que orienten el proceso de selección, como hacer pública el acta de selección y aumentar el número de magistrados que integran las salas de selección.

Así mismo, se establecería un término no superior a 15 días para publicar el fallo que resulte del proceso de revisión; se otorgaría a los altos dignatarios del Estado la posibilidad de insistir en los casos que no sean seleccionados para revisión, con estándares de motivación y transparencia; se definiría un término para la decisión sobre nulidades y este recurso sería proyectado por un magistrado distinto al ponente de la decisión.

Por otro lado, se incorporaría el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela y se realizarían cambios para fortalecer las facultades de los jueces de instancia durante el trámite de la acción.

La propuesta fija reglas claras para poner fin a las llamadas "tutelatones" y plantea que ante un hecho superado cualquier pretensión adicional por vía de tutela se acoja a la jurisprudencia existente. (Cámara de Representantes, Ponencia proyecto de ley 038/15C, 7/29/2015) Noticia generada en Jul. 30/15 (11:23 a.m.)

En asuntos tributarios debe acudir directamente a la Jurisdicción contenciosa sin agotar la conciliación previa

En el caso de que se someta primero al Ministerio Público, el término de caducidad se cuenta desde la fecha de entrega de la constancia de conciliación y no desde la de expedición.

La Previsora, a través del medio de nulidad y restablecimiento, pidió la nulidad de los actos por los cuales la DIAN no aprobó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo de la actuación administrativa iniciada contra Fundiciones y Aleaciones Certificadas que con liquidación oficial de revisión modificó el saldo a favor registrado en la declaración privada de IVA 2009-03. El saldo fue devuelto a la contribuyente, amparado con póliza, expedida por la aseguradora demandante. Pidió, como restablecimiento, que se aprobara la terminación por mutuo acuerdo como consecuencia del pago realizado por \$255 millones que corresponde al valor devuelto por la DIAN al contribuyente. Antes de radicar la demanda, solicitó conciliación prejudicial, pero, el 24 de junio de 2014 la Procuraduría confirmó el auto de 11 de junio del mismo año que determinó que el asunto no era conciliable. La demanda la presentó el 3 de julio y el Tribunal la rechazó por caducidad.

En la apelación adujo que dicha constancia si bien es de la fecha de expedición antes indicada también lo es que ella solo "estuvo disponible para entregar" el 3 de julio. "Para demostrarlo allegó certificación del Ministerio Público e indicó que en los anexos de la demanda obra la constancia en la que se plasmó a mano la fecha en que se recibió junto con la firma de quien lo hizo". Previo a ordenar al Tribunal admitir la demanda, la Sala reiteró que "cuando se pretendan discutir asuntos tributarios debe acudir directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin agotar previamente la conciliación porque no es un requisito de procedibilidad en estos casos". Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N21305 (00713-01) Nulidad-Restab 2015/06/25

Realizar un contrato interadministrativo sin respetar la selección objetiva amerita sanción penal

Aunque la realización de un convenio o contrato interadministrativo pueda hacerse mediante contratación directa, esto no significa que los funcionarios que intervienen en su trámite estén exonerados de respetar el deber de selección objetiva y demás principios inherentes a la contratación estatal, pues si los desconocen incurren en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la sentencia, la contratación directa no es sinónimo de discrecionalidad absoluta o arbitrariedad, ya que también debe atender los principios de transparencia, economía, legalidad y responsabilidad y el deber de planeación.

Por otra parte, la corporación recordó la viabilidad de variar la calificación jurídica provisional con apoyo en prueba sobreviniente y antecedente, cuando exista un error en la imputación, ya sea por la indebida selección de la norma que regula el comportamiento investigado y que lleva a tomar un nomen iuris diferente al correcto, o por equivocación en la valoración de los elementos probatorios

(M. P. Eugenio Fernández). (Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-8786 (38464), 7/8/2015) Noticia generada en Jul. 30/15 (11:14 a.m.)

Esta es la guía para mejorar comunicación de los servidores públicos con los ciudadanos

El Gobierno acaba de publicar la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia, que da las pautas necesarias para que todas las entidades estatales mejoren la comunicación con los ciudadanos.

La nueva publicación está a cargo del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, que lidera el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y da pautas sobre el manejo adecuado del lenguaje para comunicar de manera clara y efectiva las tareas que adelantan las distintas entidades públicas.

Contiene un capítulo sobre 'Pasos para escribir en lenguaje claro', con ejemplos de textos redactados con estructuras complicadas y sus versiones sencillas para el mejor entendimiento del lector.

También, da pautas sobre la organización de las ideas, además de escritura, revisión y validación de documentos, todo con el objetivo de darles mensajes claros a los ciudadanos.

(Departamento Nacional de Planeación, Documento, 7/29/2015) Noticia generada en Jul. 30/15 (2:29 p.m.)

Propuesta que reglamenta los consejos municipales de juventud fue radicada por Mininterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó un estatuto de ciudadanía juvenil, que reglamenta los consejos municipales de juventud, instancias que podrían formular y verificar la adopción de proyectos y planes para esta población en todas las regiones del país.

La propuesta establece que del total de miembros integrantes de los consejos municipales, locales y distritales de juventud el 40% sería elegido por listas presentadas por los jóvenes, el 30 % por ciento postulado por las organizaciones de jóvenes y el 30 % restante por partidos y movimientos políticos.

La iniciativa activa las comisiones de concertación y decisión, que serían convocadas por el alcalde o el gobernador, mínimo, cuatro veces al año, para el diseño presupuestal de las juventudes. La inscripción de candidatos a los consejos de juventud se realizará a través de listas únicas y cerradas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

(Senado de la República, Proyecto de ley 027/15S, 07/30/2015) Noticia generada en Jul. 30/15 (2:45 p.m.)

Acuerdos municipales que omitan términos para intervención ciudadana son nulos

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 73 de la Ley 136 de 1994, para garantizar la participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdo, la corporación municipal debe conceder el término de tres días, mínimo, entre el desarrollo del primer y segundo debate, recordó el alto tribunal.

En efecto, explicó el fallo, según lo establece el artículo 77 de la citada ley, toda persona natural o jurídica podrá presentar observaciones sobre

los proyectos de acuerdo cuyo estudio se adelante, para lo cual “la mesa directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho”.

Bajo tales argumentos, se declaró la nulidad de un acuerdo que autorizaba al alcalde del municipio a la adquisición de un empréstito, por cuanto desconoció el deber legal impuesto y se vulneró el derecho a los ciudadanos, quienes previamente lo habían solicitado, de participar en el estudio y debate del proyecto

(C.P. María Claudia Rojas). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 85001233100020100007501, 5/14/2015) Noticia generada en Jul. 30/15 (2:27 p.m.)

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co